



La resistencia indígena se organiza en guardias territoriales

Descripción

No han soltado el arco y la flecha, solo que ahora los enfilan contra otros colonizadores. Unos 133 indígenas piaroa de la comunidad Gavilán de Cataniapo al norte del Amazonas venezolano, en el municipio Atures se unieron en 2018 para conformar lo que llaman un cuerpo de resistencia civil: un grupo de centinelas para protegerse de los nuevos forasteros que irrumpen en ese rincón de la selva amazónica.

Los vigilantes se llaman *Ajoce Huayak*, vocablo piaroa que alude a una forma de trabajo comunitario. Insisten en ese asunto porque de allí deriva su legitimidad. Más que de tropas o milicias se trata, según sus palabras, de un grupo que se constituye, siguiendo decisiones adoptadas en asambleas, cuando la comunidad empezó a verse rodeada de mafias, guerrillas, mineros y *garimpeiros* que fueron asentándose en las vecindades.

Pusieron sus barbas en remojo y armaron la resistencia. Pero no había pasado un año de eso cuando fueron sorprendidos con una visita particular: hombres armados que se identificaron como *disidencias* de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) invadieron su territorio y, como ya lo han hecho en otras zonas de la Guayana venezolana, se anunciaron como sus nuevos vecinos con un guiño que viene repitiéndose en otras comunidades.

Informaron que venían del gobierno, que eran aliados estratégicos del país, recuerda el coordinador general de la Organización Pueblo Unido Piaroa del Cataniapo en Amazonas, Hortimio Ochoa. Solo que en este caso, después del revuelo inicial, terminaron por hacer caso a las demandas de los lugareños, y desistieron de instalarse. Marchamos, dialogamos y se fueron.

El asunto, sin embargo, no quedó allí. Un año después, en febrero de 2020, los mismos uniformados regresaron, esta vez ya para quedarse. Entonces, más de 700 indígenas de las riberas del Cataniapo volvieron a marchar para expulsarlos, sin éxito.

La guardia tiene más trabajo que antes. Celoso de que los cataloguen como una suerte de autodefensas, Ochoa insiste en que están bien lejos de ser un pelotón militar. Dice que no portan armas de fuego solo se les ve con lanzas de madera y que se trata de la misma comunidad

organizada. La guardia, afirma, â??interviene en la liberaci3n de personas secuestradas, participa en la b3squeda de desaparecidos en las masacres, previene el reclutamiento de ni3as y ni3os en el conflicto armado, ofrece seguridad en las movilizaciones y eventos de sus pueblos, protecci3n ambiental y seguridad territorialâ?•.

Un [c3ctel de nuevos y viejos grupos irregulares](#) â??desde mineros ilegales hasta guerrillasâ?? ha venido asent3ndose en el territorio piaroa. La expansi3n armada en el conflictivo sur venezolano, incluso en tiempos de pandemia, ha generado desplazamientos, confrontaciones, reclutamientos y depredaci3n ambiental. Tambi3n ha impactado las formas de vida tradicionales de los pueblos ind3genas que, como en el r3o Cataniapo, empiezan a constituir grupos aut3nomos de seguridad que suplen la ausencia del Estado.

En apenas un a3o, entre 2020 y 2021, surgieron noticias de al menos dos nuevas guardias territoriales ind3genas en 3reas a las que ha llegado la presencia armada: una en la comunidad piaroa de Pendare, en el municipio Autana del norte de Amazonas. y la segunda en territorio ye3kwana del r3o Caura medio, en el municipio Sucre del oeste del estado Bol3var. Se sumaron a una lista de cuatro comunidades piaroa de Amazonas, as3 como de otras en Bol3var, tanto a orillas del r3o Paragua como del r3o Cuyun3.

Por mucho, el caso m3is emblem3tico es el de la Gran Sabana, al suroeste de Bol3var, cerca de la frontera con Brasil. All3, unas 86 comunidades del pueblo pem3n, entre 120 localizadas en la zona, han adoptado este tipo de patrullas.



Alrededor de 80 voluntarios participan en la guardia territorial constituida en el municipio Autana de Amazonas. Crédito: Armando.info

En Pendare, ubicada en el norte de Amazonas, los indígenas decidieron en febrero de 2020 defenderse “por su propio medio” de la “invasión silenciosa” sobre el territorio *Tearime Siri koi Aerime Suititi* de los *uwottuja*. De acuerdo a la mitología indígena, los abuelos protegieron el territorio *piaroa* poniendo raudales que servían como puestos de control y vigilancia para impedir el paso de personas foráneas. Pero las organizaciones del crimen han salvado los raudales y otros accidentes naturales, si es que no los han usado a su favor, para penetrar el territorio e instalar campamentos debajo de la copa de los árboles o dragar el lecho de los ríos.

En 2012, la Organización Indígena Pueblo Uwottuja del Sipapo (Oipus) empezó a denunciar la entrada de grupos armados, pero la administración de Nicolás Maduro no actuó y la presencia de irregulares se incrementó. En 2019, identificó campamentos en las riberas del río Autana, Bajo Sipapo y río Guayapo y, meses después, pistas de aterrizaje y evidencias de contrabando.

Desde mediados de 2020, la figura de las guardias territoriales se ha constituido en cinco comunidades del municipio Autana con 80 voluntarios que instalan puntos de control en zonas estratégicas. Pero

esto no ha detenido a los invasores. En marzo de 2021, en un punto de control sobre el Caño Guama, en la cuenca del río Sipapo, [los mineros amenazaron](#) a los indígenas con escopetas. En el hecho, tres indígenas resultaron heridos, uno de ellos con una cortada en el rostro y pérdida de la dentadura, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de Amazonas. Frente al poder de fuego de sus adversarios, la capacidad disuasiva de las rondas indígenas resulta dudosa.



A principios de 2022, otros tres indígenas de la etnia pemón fueron heridos en la comunidad indígena Santa Lucía de Inaway, en el sureste del estado Bolívar, por miembros de los autodenominados *sindicatos* que mantienen a la fuerza el control sobre yacimientos auríferos y sus

alrededores en el municipio Sifontes. Portando armas largas y disparando al aire, miembros del *sindicato* de alias *Juancho* [arremetieron contra la comunidad](#), que había decidido ocupar un viejo galpón abandonado para dedicarlo a actividades comunitarias.

La toma del galpón representó un contratiempo para la banda delictiva, pues el inmueble permite controlar el paso por la vía de acceso a una mina bajo su control. En el enfrentamiento quedó herido el capitán de la comunidad Joboshirima, Junior Francis, cuando intentaba grabar un video. Otros dos indígenas, uno de ellos miembro de la guardia territorial indígena, fueron golpeados al intentar fotografiar el conflicto.

armando.info



Un grupo armado que opera en el municipio Sifontes, en el sur de Bolívar, arremetió³ contra varios indígenas en enero de 2022, dejando tres heridos, entre ellos un capitán y un miembro de la seguridad territorial. Crédito: Correo del Carón

armando.info



Un grupo armado que opera en el municipio Sifontes, en el sur de Bolívar, arremetió³ contra varios indígenas en enero de 2022, dejando tres heridos, entre ellos un capitán y un miembro de la seguridad territorial. Crédito: Correo del Carón

armando.info

armando.info



[Un grupo armado que opera en el municipio Sifontes, en el sur de Bolívar, arremetió³ contra varios indígenas en enero de 2022, dejando tres heridos, entre ellos un capitán y un miembro de la seguridad territorial. Crédito: Correo del Caroní](#)

La expansión de los grupos armados foráneos en este punto profundo del estado Bolívar ha obligado a las comunidades indígenas locales a organizar más, y no menos, de esas guardias, a pesar de su aparente incapacidad para rechazar a los invasores.

[En San Martín de Turumbáin](#), a orillas del río Cuyuná que marca la frontera con el Territorio Esequibo de Guyana, indígenas pemón conformaron su guardia territorial en febrero de 2021, tras la invasión de mineros ilegales a las tierras de la cercana comunidad de [San Luis de Morichal](#).

Con el vocablo pemón *Maikok*, que significa "espíritu salvaje y montañoso", la comunidad bautizó a la guardia territorial, constituida por 30 hombres y mujeres mayores de 17 años. "La comunidad se organizó y creó la seguridad sectorial por las invasiones de grupos armados y criollos que querían imponer sus normas", explicó el capitán de la comunidad Bennett Kennedy.

La guardia tiene un punto de control en los linderos de la comunidad y supervisa, lista en mano, quien entra y quien sale de las áreas mineras. Ciertas infracciones, tales como irrespetar a las autoridades indígenas, el ingreso de bebidas alcohólicas o la prostitución, son castigadas con la expulsión. Cuando decenas de mineros ilegales avanzaron de nuevo sobre San Luis de Morichal, en febrero de 2021, la guardia indígena de San Martín de Turumbáin estuvo tres meses en el sitio para apoyar el resguardo de las tierras comunitarias.

Aún con casos de éxito como el anterior, la invasión de tierras indígenas por parte de los *sindicatos*, sin embargo, no ha cesado, como tampoco lo ha hecho en zonas amenazadas por la incursión de otros grupos, como las guerrillas colombianas y los *garimpeiros* de Brasil.

Situación de armas tomar

Hasta 1999 los derechos de los pueblos indígenas no contaban con reconocimiento constitucional en Venezuela. La Carta Magna que entonces impulsó Hugo Chávez estableció, como una de sus banderas, el reconocimiento a los pueblos indígenas y la demarcación de sus tierras como un derecho inalienable.

El artículo 119 no solo encomienda esa tarea al Poder Ejecutivo, sino que el 120 añade que "el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas".

Pero del dicho al hecho, las disposiciones para la demarcación y la autonomía territorial de los pueblos originarios quedaron en letra muerta. Mientras, se multiplicaron las denuncias de abusos cometidos por fuerzas militares regulares del mismo Estado, que a su vez obligaron a los indígenas a adoptar una mayor beligerancia.

Uno de los primeros antecedentes de esos desmanes data de 2011, cuando indígenas pemón de 13 comunidades a orillas del río Paragua desarmaron y retuvieron durante cuatro días a 22 militares del

Batallón 507 de Fuerzas Especiales del Ejército, devenidos mineros, a quienes encontraron hundidos en el barro hasta las rodillas y con motobombas encendidas. El hecho y la coordinada respuesta indígena sentaron las bases para la [conformación de Musukpa](#), una comunidad en las cercanías de la mina Tonoro que diseñó un estricto compendio de normas de convivencia de diez capítulos y 76 artículos, que ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo minero hasta el ingreso de visitantes.

El ejemplo de Musukpa se replicó en los años siguientes. Miembros de 12 comunidades del sector 3 de Urimín, en el municipio Gran Sabana, detuvieron y desarmaron a 43 efectivos del Ejército venezolano que estaban ejerciendo la minería de forma ilegal en sus predios. Dos años más tarde, en el norte del mismo estado, indígenas de las comunidades *ye'kwana* y *sanemá*, de la cuenca del río Caura, hicieron algo similar: detuvieron a un comandante del Ejército y a nueve soldados, en protesta por la quema de dos viviendas y la alegada complicidad de los uniformados en prácticas mineras.

Pioneros pemones

El primer referente de seguridad indígena en el sur de Venezuela se remonta a 2001, en la comunidad pemón de Maurak, en el municipio Gran Sabana, a 15 kilómetros de la frontera con Brasil. Se llamó *â'policía civil indígena*, pues sus miembros estaban formados en seguridad, primeros auxilios y rescate. En esta comunidad nació Alexis Romero, un dirigente pemón clave en las negociaciones entre indígenas y gobierno en Musukpa en 2011.

Hasta ese momento, los problemas de Maurak eran sobre todo de orden domésticos: disturbios por ingesta de alcohol, robos menores y casos de violencia de género, según recuerda la capitana actual de Maurak, Lisa Henrito, quien asegura que se inspiró en las guardias indígenas de Colombia para dar forma a estas estructuras de seguridad interna.

El ejemplo cundió por toda la región hasta que hoy ya son 86 las comunidades del municipio Gran Sabana que cuentan con cuerpos de seguridad interna. Es frecuente que algunos de sus miembros entrenaron en Maurak, aula mater de las guardias territoriales. *â'Es una guardia porque somos guardianes de nuestro territorio, de nuestra familia, las aguas, el ambiente y todo en el territorio; y no se trata de resguardar solo el territorio de los indígenas, sino del planeta*, explica Henrito. *â'Si los órganos de seguridad de esta nación no tienen la capacidad o la voluntad de hacer su trabajo, nosotros sí lo vamos a hacer porque somos los más interesados en mantener la paz*.

En 2016, la conformación de la guardia territorial de Santo Domingo de Turasen -en el mismo municipio-, a causa del auge de la delincuencia y del tráfico de drogas y armas, provocó que el alcance de estas instancias saliera de las fronteras de la comunidad. Ese año, un homicidio en Santa Elena de Uairén, principal población criolla cerca de la frontera con Brasil, con la participación de funcionarios policiales estatales, provocó que habitantes de esa localidad, junto a las comunidades indígenas, expulsaran al cuerpo policial y tomaran el control de la seguridad con operativos en los municipios Gran Sabana y Sifontes. *â'Allí llegó la popularidad de la guardia territorial pemón*, asegura Henrito.

Ese trabajo incorporó los cuerpos de seguridad del municipio, entrenó a indígenas de comunidades distantes, como Sifontes y La Paragua, y visibilizó a la Guardia Territorial Pemón, nombre que deciden adoptar en 2017: «Los cuerpos de seguridad indígena nacieron como mecanismos internos (...) pero la mayor amenaza ahorita es la invasión progresiva de territorios indígenas, por eso estamos alertas 24/7».

Pero se puede morir de éxito. Fue el caso del [asesinato en septiembre de 2018](#) de José Váizquez, comandante de la guardia territorial en la comunidad de Turasen. Las pesquisas y la autopsia determinaron que se trató de un homicidio, de cuya responsabilidad se señaló al escolta y funcionario retirado de la Armada venezolana, Edward Frederick Curuma, quien fue arrestado. Indígenas pemón sospechan que el ataque contra este líder fue parte de un plan para debilitar la defensa territorial, a la que se desea erosionar.



[Un ataque del Ejército contra la comunidad indígena de Kumarakapay, en 2019, hizo que más de 1.000 indígenas migraran a Brasil. Crédito: María Ramírez Cabello.](#)



Un ataque del Ejército contra la comunidad indígena de Kumarakapay, en 2019, hizo que más de 1.000 indígenas migraran a Brasil. Crédito: María Ramírez Cabello.

En 2019, la violencia estatal y la represión escalaron en la Gran Sabana, en la antesala del ingreso de la ayuda humanitaria ofrecida desde Brasil. La guardia indígena de Kumarakapay, llamada Aretauka por el acrónimo de tres grupos del pueblo pemón -arekuna, taurepan y kamarakoto-, intentó impedir el paso de vehículos militares hacia la frontera con Brasil para mantener el paso limítrofe abierto y con ello el ingreso de la ayuda humanitaria, pero un [ataque del Ejército](#) en represalia contra la comunidad indígena dejó tres lugares±os muertos por impactos de bala: Zoraida Rodríguez, Rolando García y Kliver Pérez; así como decenas de heridos. [García](#) era un legendario guía de excursiones y actividades de turismo de aventuras. Un cuarto indígena herido en el incidente, [Onésimo Fernández](#), murió en marzo de 2020.

El ataque, perpetrado con armas de fuego y bombas lacrimógenas, inédito en territorios indígenas, consolidó la militarización en este municipio. Más de 1.300 pemones huyeron de su natal Venezuela hacia el lado brasileño de la frontera en busca de seguridad, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). El exodo incluyó al alcalde indígena del municipio, Emilio González. Las patrullas de Kumarakapay, que apenas portaban arcos y flechas, optaron por pausar sus actividades por temor a represalias y para evitar percepciones propiciadoras de malos entendidos, pues en general estos grupos han sido acusados hasta de paramilitares.

[Indígenas formalizan denunci...](#) by [ArmandoInfo](#)

La posibilidad de la violencia

Varias experiencias en América Latina comparten el crédito como origen común de las guardias territoriales -como también se les conoce en Colombia-, policías comunitarias, en México, o rondas campesinas, en Perú.

En el territorio indígena del Cauca, en Colombia, la guardia fue creada formalmente en 2001 con el propósito de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, amenazados por el conflicto armado, el desplazamiento y la invasión y militarización de sus territorios. La guardia es controlada por las autoridades indígenas y está conformada por 3.200 personas que *sólo* están armados con bastones y *walkie-talkies*, tratan de salvaguardar los territorios e impedir el ingreso de actores armados¹, indica un [estudio](#) del doctor en Sociología, Anders Rudqvist y el profesor de Historia, Roland Anrup, publicado en la Revista *Papel Político* de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Los investigadores suecos consideraron que la guardia indígena es uno de los elementos de la resistencia civil de las comunidades en contextos de conflictos. Es una forma de defensa no armada *contra* diferentes formas de violencia directa, es decir, violencia física², pero también puede constituirse frente a las formas de violencia estructural. *Para* el movimiento indígena, la resistencia civil es un ejercicio de autonomía y práctica comunitaria frente al Estado, los actores del conflicto armado y los intereses económicos transnacionales. Como consecuencia del principio de autonomía las comunidades han decidido no abandonar el territorio en casos de emergencia sino recurrir a la resistencia civil desde las asambleas permanentes³.

El politólogo y abogado, Vladimir Aguilar, investigador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela, explica que las guardias territoriales son mecanismos que los pueblos indígenas han encontrado para el control de sus territorios ante las amenazas de terceros. Aunque no todas son iguales, aclara. *Las de Bolívar* son de carácter rígido (control de acceso hacia áreas mineras) mientras que las de Amazonas son de salvaguarda de sus territorios y ecosistemas (guardianes de la selva)⁴.

En la medida en que la expansión de la frontera extractivista a través de la minería ilegal siga en aumento, este mecanismo de control seguirá creciendo, sostiene.

Sin embargo, aclara que la tradición de los pueblos indígenas no incluye posiciones bélicas. Que esta característica cambie o no, va a depender de la presión y amenazas hacia sus territorios. *Los indígenas* se han convertido en los verdaderos custodios de la soberanía e integridad territorial de la nación⁵.

() Esta es la quinta entrega de la serie "Corredor Furtivo", investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.*

En el diseño, programación y montaje del algoritmo, mapa, investigación y edición, participaron Jorge Luis Cortés, Cristian Hernández, Javier Lafuente, Ewald Scharfenberg, Guiomar del Ser, Fernando Hernández, Ana Fernández, Eliezer Budasoff, Alejandro Gallardo, Luis Sevillano, Ignacio Catalán, Vanessa Pan, Yeilys Márquez y Pablo Rodríguez.

Fecha de creación

2022/02/13